



II Congrés de Professionals i Entitats de Gerontologia i Geriatria de Catalunya

Taula Temàtica 5 Atenció directa: El professional davant de les noves necessitats de la dependència



T.5.1 Una visió crítica sobre les necessitats de l'atenció a la dependència

Coordina:

Sra. Anna Selva (*Responsable àrea gent gran de Caritas Barcelona*)

Ponents:

Sr. Héctor Maravall (*Adjunt secretaria de política institucional de CC.OO.*)

Sr. Quico Mañós (*Fundació Pere Tarrés, Membre Fòrum Intercol·legial de la Gent Gran*)

Sr. Toni Rivero (*Responsable de l'àrea d'estudis i consultoria del FICE*)

17 de març - 15.00h
La Farga de L'Hospitalet

Sr. Héctor Maravall

Adjunt secretaria de política institucional de CC.OO.

“ANTEPROYECTO DE LEY DE DEPENDENCIA: UN AVANCE, CON MÁS DUDAS QUE CERTEZAS”

Desde hace años las organizaciones sociales, sindicatos, expertos, etc. han venido planteando como una prioridad política la aprobación de un sistema público de atención a la dependencia.

Por ello en una reflexión inicial, hay que valorar positivamente, como un punto de partida en esa vía de aprobar un sistema público de atención a la dependencia, el Acuerdo firmado por el gobierno con los sindicatos y la patronal el pasado mes de diciembre y la posterior presentación de un primer anteproyecto de ley.

La creación y desarrollo del sistema público de atención a la dependencia debería suponer un reforzamiento muy importante de nuestro aun débil Estado de Bienestar Social, convertirse en el elemento más sustancial de lo que tendría que ser el cuarto pilar del Estado de Bienestar Social, los servicios sociales. Por ello su diseño legal debe hacerse de manera clara, precisa, rigurosa y con una vocación de estabilidad en las próximas décadas.

Es evidente que no es una tarea fácil, ni política ni técnicamente, aprobar un marco normativo que sea plenamente respetuoso con la distribución competencial establecida en la Constitución y que a la vez garantice los principios de igualdad, cohesión y solidaridad. De ahí la importancia de lograr el máximo consenso político y social.

El objetivo central de la ley debe ser garantizar sin ningún género de dudas la atención a la dependencia como un derecho subjetivo, universal e igual para todas las personas en situación de dependencia que residan en España.

Dado el marco competencial que establece la Constitución, la mejor forma de garantizar ese derecho y su reconocimiento sería en el campo de la acción protectora de la Seguridad Social, al amparo del art. 38 de la Ley General de la Seguridad Social y de los arts. 149, 1, 1ª y 17ª de la Constitución.

Esa integración como un nuevo derecho de la Seguridad Social, vía seguida por otros estados europeos con fuerte tradición en políticas sociales y que incluso son estados federales más descentralizados que el nuestro, no tendría porque implicar aportaciones de las cotizaciones sociales, sino diseñarse como una prestación no contributiva de la Seguridad Social con financiación de impuestos generales, como ha venido sucediendo históricamente con nuestro Sistema Nacional de Salud.

Esa inclusión en el marco protector de la Seguridad Social es plenamente compatible con la gestión exclusiva y directa del sistema de atención a la dependencia por parte de las Comunidades Autónomas (y en determinados programas por las Corporaciones Locales).

Por el contrario el modelo diseñado en el anteproyecto de ley opta por una vía con fuertes elementos de imprecisión e incluso de discrecionalidad en la fijación de los derechos, prestaciones y financiación, que puede originar diferencias en el acceso, calidad e intensidad de las prestaciones, conflictos y hasta problemas de discriminación en las formulas de cofinanciación.

La ley que instaure el sistema público de atención a la dependencia, para ser respetuoso con las competencias autonómicas, no puede descender a grandes precisiones a la hora de establecer el contenido y aplicación de los derechos. Sin embargo hay que encontrar un punto de equilibrio ente esa exigencia constitucional y el casi total vaciamiento de contenidos reales que figura en el actual anteproyecto de ley.

No se concretan la mayoría de los aspectos más importantes de aplicación de la ley, como el baremo, las características y la intensidad de la cartera de servicios, las prestaciones económicas, la participación económica de los usuarios, la prestación de asistencia personalizada, las condiciones de las prestaciones económicas vinculadas al servicio, las prestaciones económicas para cuidados en el medio familiar, la integración en la Seguridad Social del personal cuidador no profesional, etc. y los remite a su posterior desarrollo reglamentario, tras la presentación al Consejo Territorial del Sistema Nacional de Dependencia. Por ello, resulta imprescindible incluir mayores precisiones en el texto de la ley.

En relación al diseño de financiación del sistema contemplado en el anteproyecto de ley, tiene aspectos muy confusos en cuanto a su estabilidad en el tiempo, más allá del año 2015 y en el reparto de los compromisos de financiación. Se contempla un sistema de colaboración bilateral entre la Administración General del Estado y cada Comunidad Autónoma, mediante Convenios anuales, modelo que introduce un factor de confusión, inestabilidad y discrecionalidad en la financiación y gestión del Sistema, que debería evitarse.

Establecer un método de financiación estable, transparente y suficiente, es una condición básica para evitar que en el sistema de atención a la dependencia se reproduzcan las tensiones de financiación del sistema nacional de salud o el

grave deterioro de la financiación del plan concertado de servicios sociales básicos.

La denominación de la futura ley resalta en primer termino “la promoción de la autonomía personal”, cuando en el contenido del articulado, mas allá de declaraciones y principios genéricos, hay muy pocas medidas de apoyo a la autonomía personal y, de las pocas que hay, las más concretas se supeditan a las disponibilidades presupuestarias.

Siendo más que discutible la idoneidad de incluir en un mismo proyecto de ley la atención a la dependencia y la promoción de la autonomía personal, en lugar de tener otro marco normativo diferenciado, sin embargo sí se mantiene la actual denominación, debería incluirse un nuevo Título con medidas concretas que garantizaran la autonomía personal.

La atención a la dependencia tiene un componente de servicios sociales fundamental, pero también un papel importante del Sistema Nacional de Salud, en la detección precoz, prevención, rehabilitación y tratamiento sanitario y sociosanitario de las situaciones de dependencia.

Por ello, resulta incomprensible como a lo largo del proyecto de ley, no aparece para nada el papel del Sistema Nacional de Salud en la atención a la dependencia y tan sólo hay dos referencias muy genéricas a la coordinación socio-sanitaria, delegando su implantación en el ámbito de actuación de cada Comunidad Autónoma.

Las Corporaciones Locales desempeñan un papel importante en la gestión de determinados programas y equipamientos de servicios sociales vinculados a la atención a la dependencia, además de ser en la mayoría de los casos la administración primera receptora de las demandas ciudadanas en esta materia. Es cierto que son las Comunidades Autónomas las que tienen que ordenar y regular la oferta de servicios sociales de su ámbito territorial, así como proceder, en su caso, a los oportunos procesos de descentralización administrativa.

Pero partiendo de esa realidad que la legislación estatal debe considerar y respetar, resulta difícilmente aceptable que en el texto del anteproyecto de ley las menciones al papel de las Corporaciones Locales sean escasísimas y el único artículo que se les dedica es absolutamente genérico. Resulta especialmente inexplicable que en el Consejo Territorial del Sistema Nacional de dependencia, haya la ausencia de una representación de las Corporaciones Locales.

En relación a la memoria económica que se acompaña al anteproyecto de ley, solo hay datos globales, que aunque en principio no hay porque cuestionar ni en su importante global ni en su periodificación desde el año 2007 al año 2015, no aportan ningún elemento concreto de cómo se han llegado a los mismos. O se creen o no se creen, pero no hay manera de analizarlos o discutirlos.

Se incluyen algunas reflexiones genéricas a tener en cuenta a la hora de establecer la cofinanciación de los usuarios en los casos de ayuda a domicilio y de otros servicios en los que la personas sigue residiendo en su casa, así como en los supuestos de atención residencial, que en algunos aspectos se pueden compartir, pero que concluyen sin mayor información en una cifra global de cofinanciación de los usuarios, entre el 30% y el 40% del gasto total, que en todo caso parece elevadísimo.

En definitiva, el anteproyecto requiere numerosas e importantes precisiones e incorporaciones, como el propio Consejo Económico y Social ha indicado. Esperemos que el gobierno sea receptivo y presente un proyecto de ley que realmente de respuesta a las demandas de cientos de miles de familias cuidadoras y de personas en situación de dependencia.

Sr. Quico Mañós

Fundació Pere Tarrés, Membre Fòrum Intercol·legial de la Gent Gran

Una visió de les problemàtiques de la dependència

El propassat dia 22 de desembre es va aprovar “l’Avantprojecte de la Llei de la Dependència”. Aquest és un document molt esperat en el sector de la geriatria per la gran importància que ha de tenir en els propers anys. Aquesta temàtica no deixa indiferents els diversos agents socials talment com es pot comprovar a la xarxa en notícies i opinions de diversos diaris digitals .

En aquest debat sobre la dependència i la independència, cal que des del sector dels professionals que treballem en l’àmbit de la gent gran, sapiguem trobar respostes des de la interdependència. Hem de potenciar un nou estatut per a l’autonomia personal que ens permeti, primerament, reconèixer les capacitats de cada persona per tal de no substituir-la en allò que encara és capaç. En aquest sentit és un encert començar a parlar d’una llei de “Foment de l’autonomia personal” que alhora atén les situacions de dependència.

En l’avantprojecte de la Llei del foment de l’autonomia personal, s’estableixen uns mecanismes de valoració de la dependència que ens defineixen tres graus de dependència: moderada (necessitat d’ajuda per a desenvolupar activitats

bàsiques de la vida diària – ABVD un cop al dia), severa (necessitat d'ajuda per a desenvolupar ABVD's més d'un cop al dia) gran dependència (necessitat permanent d'ajuda per a desenvolupar les ABVD's); també es diferencien dos nivells dins de cada grau de dependència: primerament la capacitat d'autonomia mantinguda i en segon terme la intensitat de cura que requereix. Aquesta valoració porta els polítics a definir catàlegs de serveis en funció de graus i nivells.

Aquest tipus de valoració de la dependència no ens planteja cap novetat en el sector ja que consolida els sistemes de valoració utilitzats fins al moment, no obstant això s'emmarca en un sistema que planteja reptes nous com és el caràcter universal i públic de les prestacions; des de condicions d'igualtat i no discriminació i la col·laboració coordinació interadministrativa.

En cap cas es parla de la dependència social, per causes de manca de possibilitats econòmiques o de xarxa social en la que hom pot estar integrat. Cal doncs definir quin és el catàleg real de les dependències. Quines son aquestes formes de dependència no establertes en l'avantprojecte? Com hi podem donar solució?

Tot i així només assolirem els més alts graus d'autonomia si som capaços d'educar les persones amb capacitats diferents des de la interdependència. L'autonomia té valor quan som capaços d'aprendre a dependre dels altres. La interdependència ens porta a les persones a aprendre que només serem autònoms des de la consciència que no es tracta només de l'autonomia física sinó que en la quotidianitat depenem també de tot allò que ens aporten les altres persones amb qui ens relacionem. L'autonomia plena només es pot assolir des de la coordinació i la col·laboració interpersonal i interadministrativa, tant personalment com políticament.

Tanmateix, tot procés d'autonomia té els seus condicionats, un dels més importants és el finançament. En l'avantprojecte de la Llei de la dependència se'ns parla d'un sistema de finançament públic "complementat" amb aportacions dels beneficiaris per tal de potenciar un sistema estable, suficient i sostenible (solidari?). L'aplicació de criteris de sostenibilitat vindrà definit de forma progressiva en funció de la capacitat econòmica.

En definitiva, ens cal potenciar un estatut de l'autonomia personal basat en donar valor a les capacitats mantingudes, així com en la definició de les problemàtiques per a assolir un desenvolupament normal. La gran dificultat, però, rau en definir aquesta normalitat, tant personal com política, ja que sovint ens trobem davant normalitats (graus desitjables d'autonomia) dominants (definides per qui té el poder legislatiu) i enfront de normalitats dominades (que tenen sempre impediments per a desenvolupar-se amb plenitud).

Sr. Toni Rivero

Responsable de l'àrea d'estudis i consultoria del FICE

Toni Rivero és economista. Actualment és responsable de l'Àrea d'Estudis i Consultoria de l'Institut de l'Envel·liment de la UAB. Entre els seus darrers projectes destaca l'Estudi del model d'atenció a les persones grans amb dependència a Espanya, editat per Edat i Vida; l'Anuari de l'Envel·liment de Catalunya 2004 i l'Estudi per a la construcció d'un instrument de valoració de la dependència a Espanya, encarregat per IMSERSO.

Resum de la ponència:

Revisió dels escenaris d'ocupació del Llibre Blanc de la Dependència a partir de l'experiència d'Alemania. Les dades d'Alemania aporten evidències de que la posada en marxa de la llei de la dependència genera impactes positius en el consum de serveis d'atenció, en l'ocupació i en les entitats prestadores de serveis. Però, l'accés a prestacions econòmiques no vinculades a serveis pot reduir molt la intensitat dels impactes al sector.